



VOL: AÑO 4, NUMERO 11

FECHA: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1989

TEMA: TRANSICION Y DEMOCRACIA EN MEXICO: El sistema político hacia fin de siglo

TITULO: **Notas sobre el PRI y las transformaciones políticas actuales**

AUTOR: *Esperanza Palma* [\*]

SECCION: Artículos

## RESUMEN:

El ensayo analiza el desgaste que ha sufrido el PRI a lo largo de la presente década, en lo que se refiere a las funciones que ha desarrollado tradicionalmente dentro del sistema político. La tesis central que se maneja en el trabajo es que la fórmula del PRI como partido del gobierno está atravesando por un relativo agotamiento en tanto ya no cumple cabalmente las tareas para las cuales fue creado: articular los intereses de los actores sociales fundamentales, monopolizar los puestos públicos, formar a la clase política y legitimar las políticas gubernamentales.

## TEXTO

I

Casi todos los observadores de la realidad política nacional coinciden en señalar que México está atravesando por una etapa de transición cuyo rasgo fundamental es el replanteamiento de las reglas del juego que normaron la relación entre sistema político y actores sociales a lo largo de nuestra historia posrevolucionaria. Es una etapa que se caracteriza por el cuestionamiento de los canales tradicionales de acceso al poder, las formas de negociación y el sistema de representación política en su conjunto. Sin duda uno de los rasgos esenciales de este momento histórico es precisamente el desgaste del PRI en tanto pieza clave del sistema político.

Mucho se ha hablado recientemente de la crisis de la hegemonía priísta. Sin caer en hipótesis extremistas que ven signos del fin del PRI, es evidente que existen en el escenario político una serie de síntomas del deterioro del Revolucionario Institucional. Los cambios ocurridos en el ámbito electoral, la política económica implementada desde el sexenio pasado, el discurso modernizador del actual grupo gobernante así como las acciones emprendidas en contra de ciertas dirigencias sindicales priístas, son algunos de los indicadores del desgaste del PRI que expresan un trastocamiento de las funciones que ha tenido tradicionalmente dentro del sistema político en su conjunto.

El presente trabajo tiene por objetivo hacer algunas reflexiones preliminares en torno a las funciones del PRI que se han visto desgastadas a lo largo de la década presente. En nuestra opinión, son básicamente cuatro funciones del partido tricolor las que se han deteriorado de manera más evidente desde 1982:

1. Articular y expresar los intereses de los actores sociales fundamentales.
2. Monopolizar los puestos públicos.
3. Formar a la clase política.

#### 4. Apoyar y legitimizar las políticas gubernamentales.

El desgaste de estas tareas, que como trataremos de explicar está vinculado a los procesos de modernización y a los propios cambios en el grupo gobernante, pone en evidencia un fenómeno que puede ser trascendental para el futuro democrático de nuestro país: que la fórmula del PRI como partido del gobierno [1] está atravesando por un relativo agotamiento. Intentaremos pues, analizar cómo se han modificado las funciones antes señaladas.

#### II La articulación de intereses de los actores sociales fundamentales y el monopolio de los puestos públicos

Desde sus orígenes el partido se conformó como una instancia aglutinadora y articuladora de diversos intereses a través de la cual el grupo gobernante concertaba con los actores políticos fundamentales (Leff, 1982: 202). Al transformarse en PRM logró incorporar a la diversidad social, esto es, a las grandes organizaciones de masas, a un proyecto nacional a través del pacto corporativo.

Este pacto que funcionó a lo largo de varias décadas en el contexto de un México eminentemente rural, ha tenido que enfrentarse a los procesos de modernización económica que han dado lugar a la emergencia de nuevos actores sociales (Aguilar Camín, 1988). Dichos actores -constituidos fundamentalmente por clases medias y una nueva clase empresarial- se han formado fuera de los canales corporativos priístas y en este sentido, son portadores potenciales de una nueva cultura política demandante de nuevos espacios de participación y nuevas formas de negociación política. En esta medida tales sectores difícilmente se sienten representados por el PRI y requieren, por ende, de la ampliación del sistema de representación política.

La contradicción entre una sociedad cada vez más plural y la lógica corporativa priísta no es algo que haya aparecido recientemente en la escena política. Desde 1968 se ha venido manifestando que la existencia de un partido del gobierno que monopoliza las funciones públicas es incompatible con las demandas de democratización de los actores sociales producto del desarrollo industrial. Así pues, "la emergencia de nuevos valores y de nuevas prácticas centradas en la participación ciudadana, está minando el ambiente natural del modelo corporativo de organización política" (Sánchez Susarrey, 1988: 14).

Por otro lado, observamos la proliferación de organizaciones independientes y alternativas al PRI a partir de la década de los setenta. Tanto en el ámbito urbano como en el rural comienzan a surgir agrupaciones que desconocen el liderazgo priísta y que se mantienen como interlocutores del régimen sin pasar por su incorporación al partido del gobierno (ejemplo de esto son los sindicatos universitarios y la CONAMUP, por sólo mencionar algunos). Ello indica pues, que el PRI empieza a perder capacidad para articular en torno suyo la iniciativa social de diversos grupos. (Pereyra, 1985: 218-219).

Con lo anterior no queremos decir que el partido haya dejado de representar a sectores importantes de nuestra sociedad. Finalmente, sigue manteniendo en su interior a importantes contingentes obreros y campesinos. Lo que pretendemos señalar es que el PRI ha dejado de ser, como en los años previos al desarrollo estabilizador, el espacio casi único de representación y canalización de intereses. Este hecho no ha dejado de expresarse en el ámbito electoral. A lo largo de la década de los ochenta el PRI ha visto descender considerablemente su votación. Además de las razones coyunturales que explican este fenómeno (como el disgusto de ciertos sectores por la crisis económica) es claro que en el desgaste electoral del PRI se está expresando el pluralismo social al que hacíamos referencia anteriormente.

Las sucesivas reformas electorales implementadas desde los setentas pueden interpretarse como intentos de los gobiernos por adecuar al sistema político a la nueva realidad social y cultural. La llamada reforma política permitió que se expresara, aunque no de manera acabada, el pluralismo de nuestra sociedad en el ámbito de las elecciones. Y aún más: el reconocimiento legal de los partidos de oposición que antes se encontraban en la clandestinidad, el establecimiento de una serie de prerrogativas y la ampliación de la representación implicaron para el PRI un cambio en las reglas del juego: de ser un partido casi único en términos electorales ahora tuvo que enfrentarse a una mayor competencia. La relativa transformación del sistema político a través de la apertura electoral ha afectado la identidad política del PRI en tanto lo enfrenta a una competitividad para la cual no fue creado minando otra de sus funciones tradicionales: la de monopolizar los puestos públicos.

No resulta demasiado complicado demostrar que el partido ha perdido capacidad de convocatoria a nivel electoral. En relación a 1982, en 1988 su candidato a la presidencia disminuyó en votación un 18%. Además redujo considerablemente sus posiciones dentro del poder legislativo de tal forma que ahora no cuenta con el número necesario de diputados para hacer modificaciones constitucionales. Asimismo, habría que revisar la cantidad de plazas que ha perdido a nivel regional. Algunos analistas calculan que entre 1978 y 1981 perdió 43 municipios y para 1983 tan sólo el PAN obtuvo 30 presidencias municipales entre las que se encontraban varias capitales de estados norteros (Martínez Assad, 1985: 5). En 1989 en las elecciones locales realizadas en Baja California el PRI pierde por primera vez en su historia una gubernatura -(sobre este hecho insólito en nuestra historia política moderna, volveremos más adelante). Aun con la pérdida de una gubernatura no podemos concluir que el PRI esté al borde de su quiebra político-electoral. En las zonas rurales obtiene porcentajes que están muy por encima del 50% de la votación y sigue controlando los puestos políticos fundamentales. No obstante, es claro que está perdiendo capacidad para monopolizar los puestos públicos y, que en este sentido está transitando, en términos de su papel en el sistema electoral, de partido hegemónico a partido mayoritario (Molinar, 1988: 1-3).

Hasta aquí dos de las funciones priístas que se han desgastado: la articulación de intereses y el monopolio de los puestos públicos. Pasaremos ahora a analizar las otras dos tareas que se han deteriorado y que afectan su funcionamiento como partido del gobierno.

### III La formación de la clase política y la legitimación de las políticas gubernamentales

El ascenso de la tecnocracia marca una ruptura importante con respecto de la forma tradicional en que se reclutaba a la élite política. Hasta antes de los setentas el PRI representaba el canal a través del cual se accedía a la presidencia de la república y a la alta burocracia. Los presidentes provenían de la militancia política priísta y en este sentido, habían ocupado algún puesto de elección popular. Era requisito haber pasado por alguna gubernatura, senaduría o diputación (Aguilar Camín, 1988: 131-132).

Contrariamente a esta tradición, los últimos cuatro presidentes provienen directamente del sector público y en especial de los circuitos financieros del gobierno (con excepción de Echeverría). La emergencia de los tecnócratas, que apareció de manera mucho más tangible desde el sexenio pasado, es un indicador de que el PRI ha dejado de ser el canal fundamental de ascenso a la dirigencia política.

En nuestra opinión este fenómeno está teniendo una consecuencia de gran trascendencia: que se está dando un relativo distanciamiento entre el grupo gobernante y

el partido. Es un alejamiento que se expresa de manera inmediata en el espacio de lo ideológico-discursivo y que tiene como trasfondo la existencia de distintos proyectos políticos. El grupo de los tecnócratas mantiene una visión de los problemas del país que difiere en gran medida del tradicional populismo propio del PRI. Desde 1982 se viene manifestando esta diferencia ideológica entre tecnocracia y priísmo. Es una diferencia que aflora en el contexto de la nacionalización de la banca, la crisis económica y el desprestigio del PRI; elementos que de manera evidente empiezan a afectar la propia legitimidad del régimen y particularmente del gobierno. En este punto es preciso recordar que cuando el grupo delamadridista asciende al gobierno predomina una atmósfera ideológica cargada de animadversión al partido del gobierno. Los ataques a la corrupción y a la ineficiencia gubernamentales, así como las críticas al estilo populista de gobernar forman parte del sentido común de amplias capas de la población, especialmente de los sectores derechistas.

Creemos que no es exagerado plantear que en esta coyuntura política -marcada por el desprestigio del PRI- el partido se torna en una instancia disfuncional al gobierno y al régimen en su conjunto. Tan es así, que el propio grupo delamadridiano percibe esta situación y de hecho asume discursivamente muchas de las críticas al priísmo. El abierto deslinde con respecto del populismo por parte de MMH y la bandera de la renovación moral, pueden interpretarse como un indicador del distanciamiento (que el propio gobierno parece querer subrayar) entre tecnocracia y partido. El otro indicador fundamental es la política económica implementada desde el sexenio pasado, que de hecho ha sido fuente de fricciones entre gobierno y partido (Loaeza, 1989: 13). Dicha política económica de tinte neoliberal ha implicado la reducción del Estado, la disminución del gasto público y los topes salariales y ha venido a cuestionar los planteamientos tradicionales priístas que han apuntado justamente hacia el intervencionismo estatal. La Corriente Democrática, que posteriormente saldría de las filas priístas, fue, entre otras cosas, una reacción frente a esta política que contradecía abiertamente la bandera priísta de justicia social. Los miembros de la CD reclamaban la independencia del partido con respecto de un gobierno que sustentaba postulados ideológicos contrarios a los principios priístas. Las corporaciones por su parte, no rompieron con el gobierno, pero de alguna manera manifestaron su descontento ante la salida que el gobierno pretendía dar a la crisis económica.

El ascenso del grupo salinista representa la reafirmación de esta tendencia. La consigna de "la política moderna" da cuenta de ello. La modernidad aparece dentro del discurso del que fuera candidato a la presidencia del PRI, como lo opuesto a muchas de las tradicionales prácticas priístas: a los clientelismos, al acarreo, la corrupción y al fraude electoral.

Más importantes aún son las acciones emprendidas por el salinismo hecho gobierno en contra de los liderazgos tradicionales de las corporaciones priístas. La destitución de algunos líderes históricos refleja la contradicción entre el proyecto modernizador salinista y el sector más atrasado del partido. Reflejan pues, que el PRI ya no le es tan funcional al gobierno y que por el contrario, este último requiere para obtener legitimidad, de llevar a cabo acciones en contra del primero. La institución presidencial, incluso, se está reconstituyendo sobre la base de atacar a elementos claves del PRI y de desligarse discursivamente del mismo.

Lo anterior convalida la tesis de que está desgastada la fórmula del PRI como partido del gobierno. Parecería que se está convirtiendo en un obstáculo del proyecto de modernización económica y política del actual grupo gobernante.

En este punto debemos anotar los rasgos generales del proyecto modernizador y del proyecto tradicional del partido para comprender en qué sentido se contraponen y en qué medida el segundo representa una traba para la realización del primero.

Sin pretender hacer un análisis detallado podríamos decir que los rasgos generales de ambos proyectos son los siguientes:

Tradicional. Sustentado por las dirigencias sindicales de las corporaciones priístas (y de manera más evidente por el sector obrero), este proyecto es portador del populismo entendiendo por este una ideología difusa que reivindica el papel activo del Estado para "proteger" a los sectores populares. La alianza de estos sectores con los gobiernos de la revolución se basó en el compromiso estatal de realizar las reformas sociales necesarias para mejorar el nivel de vida de estas clases (Córdova, 1973).

La alianza funcionó, no obstante, sobre la base de privilegios corporativos, excluyentes de los sectores marginados no organizados; y lo que es más importante, de una cultura política autoritario-paternalista. Desde la etapa cardenista las corporaciones se conformaron como los principales instrumentos de representación y negociación "...el campo de lo público quedó socializado y monopolizado por los organismos corporativos afiliados al partido oficial..." (Sánchez Susarrey, 1988: 13).

Ello explica en alguna medida por qué esta corriente corporativa del PRI se ha opuesto tradicionalmente a la apertura del sistema político sobre todo en lo que se refiere a las reformas electorales que tienden a ampliar y a fortalecer el subsistema de partidos. La consolidación de este último implica abrir un nuevo tipo de representación política en detrimento de una representación corporativa, íntimamente vinculada al monopolio de los puestos públicos.

En síntesis: los tradicionales defienden las funciones que históricamente mantuvo el partido dentro del sistema político.

Modernizador. Retoma las tesis neoliberales en materia económica: reducción del gasto público, venta de paraestatales, mayor integración con el mercado internacional. En términos generales este proyecto apunta hacia la reducción de la intervención del Estado en la economía, y la introducción de criterios de eficiencia y productividad.

En lo político recupera varias demandas de los partidos de oposición y de la ciudadanía que se han manifestado por la democratización del régimen. En su célebre discurso de campaña El reto de la democracia, Salinas desarrolla el planteamiento de su propuesta modernizadora. En el se parte del reconocimiento de la pluralidad de la sociedad mexicana y de la necesidad de profundizar la democracia del sistema político. La profundización de la democracia supone "el respeto irrestricto al sufragio libremente emitido", el reconocimiento de "la mayor competencia que significa la creciente pluralidad del país" así como "el rechazo a prácticas obsoletas y vicios electorales". A lo largo del discurso insiste en que se realizarán elecciones transparentes y en que el PRI debe convencer con organización y programas (1988: 5). El otro planteamiento fundamental es "El fortalecimiento del régimen de partidos como base de la nueva cultura política: aquella que se sustenta en una firme responsabilidad mutuamente compartida entre el Estado (y) los partidos..." Los partidos de oposición son concebidos como parte del sistema político y se plantea la necesidad de Modernizar al PRI, lo cual no implica que deje de ser mayoría, sino que renueve los procedimientos internos de selección de candidatos, reconozca la pluralidad interna, forme alianzas y acuerdos políticos y fortalezca las representaciones sociales internas.

Cabe señalar que la incorporación de estos planteamientos en el discurso salinista no responde a una cuestión de buena voluntad o de coherencia doctrinaria con los postulados liberales. La voluntad de cambio que presenta el grupo modernizador se explica más bien por razones de sobrevivencia política y por un intento de adecuar parcialmente al sistema político a la nueva realidad social y cultural. Es finalmente una respuesta ante las transformaciones que han operado en el ámbito social.

Antes de pasar a desarrollar los puntos de tensión entre ambas corrientes así como los puntos de enlace es necesario puntualizar que estas no son las únicas tendencias que existen dentro del PRI. Es obvio que algunos políticos priistas no encajan en ninguna de estas tendencias y que hay otras explícitamente conformadas como la llamada "corriente crítica" [2] que sustentan planteamientos muy particulares que difieren tanto de la tradicional como de la modernizadora. No haremos mayor referencia a ellas dado que nos parece que en la coyuntura política actual no están en juego en lo que se refiere a las definiciones y posibles transformaciones del PRI.

¿Cuáles son los elementos fundamentales de fricción entre ambas corrientes?

Para el grupo gobernante -modernizadores- el PRI tal como está es disfuncional básicamente por dos razones: primero, por que las corporaciones son un obstáculo para la implementación de la política económica neoliberal y segundo, porque el partido se ha tornado en fuente deslegitimadora del grupo gobernante.

El proyecto de modernización económica del grupo salinista requiere de la destrucción de privilegios corporativos para introducir criterios de eficiencia y productividad. Probablemente la destitución de los líderes de los sindicatos de maestros, de petroleros y de músicos sea el inicio de este proceso, aunque también en el caso de dos de ellos responde a demandas de democratización sindical. Dentro del proyecto salinista se le da prioridad a los intereses empresariales y es por ello que se requiere de la transformación de las relaciones tradicionales entre gobierno y corporaciones; transformación que aparentemente apunta a la negociación directa entre sindicatos y empresas.

Por otro lado, parece que este proyecto pretende refuncionalizar al PRI, esto es, adecuarlo a la nueva realidad electoral haciéndolo más competitivo para que se convierta de nuevo en una instancia que legitime al gobierno. Como el propio Salinas ha planteado, se parte del reconocimiento de que el PRI está pasando de partido hegemónico a partido mayoritario a raíz del 6 de julio, y en este sentido se trataría de seguir siendo mayoría aceptando los triunfos de los partidos de oposición. Es evidente que esto último aún está por definirse. En las elecciones locales recientes se reconoció el triunfo del PAN a la gubernatura. No obstante, en Michoacán no se ha reconocido la mayoría al PRD para el congreso local. Para explicar esto habría que hacer un análisis de las condiciones locales. Por ejemplo, influye que el PRI en Michoacán es mucho más fuerte que en Baja California así como el hecho de que el PAN ha mostrado una postura mucho más negociadora con el gobierno que el PRD.

Pero más allá de esta situación es preciso analizar las reacciones que ha generado el triunfo de Acción Nacional en el estado norteño. Se ha generado un conflicto entre la dirección nacional del PRI (en manos de salinistas) y algunas direcciones estatales. Y por otro lado, las corporaciones también han reaccionado violentamente ante la derrota en Baja California a tal punto que la CTM amenazó con abandonar las filas priistas para formar un verdadero partido de los trabajadores.

En síntesis: los puntos fundamentales de la tensión entre ambas tendencias son la política económica y la cuestión electoral que pasaría por una transformación del PRI.

Sabemos de antemano cuáles son las objeciones que pueden hacerse a la tesis según la cual se está produciendo un relativo alejamiento entre grupo gobernante y partido en el sentido en el que lo indicamos arriba. La primera y la más obvia es que la campaña de Salinas estuvo impregnada de los métodos tradicionales priístas: acarreo, clientelismos, utilización de los recursos estatales, etc. Entonces ¿cuál modernización? En nuestra opinión este hecho confirma la contradicción que señalamos: por un lado, se presentaba un discurso que rechazaba la cultura política priísta y por otro, el PRI que organizó la campaña funcionó bajo la única lógica que ha tenido. Es evidente que en lo inmediato todavía no se han sustituido las prácticas tradicionales por otras que estarían más vinculadas a una lógica ciudadana.

Por otro lado, es evidente que la tesis que hemos planteado requiere de matices.

Decir que el PRI se ha desgastado en su fórmula tradicional de partido del gobierno no implica concluir que existe una abierta ruptura entre grupo gobernante y partido. El grupo gobernante necesita al PRI en términos electorales y fue este partido el que finalmente le permitió acceder al poder. En este sentido, gobierno y partido no forman parte de ámbitos excluyentes o autónomos.

Por otra parte, la propia política económica del equipo salinista requiere del control corporativo sobre las demandas sociales. He aquí una contradicción en la cual se encuentra entrampado el gobierno: por un lado, las corporaciones le sirven para la contención de peticiones salariales pero por otro, le impiden llevar a cabo su proyecto de transformación de la estructura económica.

Por su parte, los tradicionales siguen vinculados al grupo gobernante en la medida en que sólo pueden funcionar como partido del gobierno. A pesar de sus desacuerdos con el salinismo terminan por avalar las políticas gubernamentales. Esto se explica en alguna medida porque su ya muy minada fuerza gremial sigue dependiendo del gobierno. A ello habría que agregar el tipo de consenso generado dentro de estas corporaciones. Es un consenso pasivo que impide a los sujetos encontrar alternativas de organización política.

Estos son pues, descritos de manera muy sintética algunos de los elementos que evitan una ruptura entre ambas tendencias. Los lazos representan los límites de la corriente salinista para poder implementar su proyecto de modernización.

#### Conclusiones provisionales

El PRI atraviesa actualmente por una crisis de identidad política provocada fundamentalmente por el ascenso electoral de los partidos de oposición y por la política del gobierno en materia económica y electoral.

Su desdibujamiento como partido del gobierno -a raíz del desgaste de sus funciones tradicionales de monopolio de los puestos públicos, articulación de la iniciativa social, formación de la clase política y legitimación del gobierno- no se ha traducido en una mayor independencia con respecto del grupo gobernante. En ciertas ocasiones puede manifestar su desacuerdo con algunas decisiones y políticas del gobierno (como en el caso reciente de las elecciones en Baja California) pero, finalmente se subordina a las mismas.

No obstante, dicha subordinación no anula el problema central: que hay rupturas y fricciones entre la élite gubernamental y sectores priístas que impiden se genere un consenso básico en torno a las reglas de la competencia por el poder (Molinar, 1988: 4).

Este es un problema trascendental para la democratización del sistema político en su conjunto.

El fortalecimiento de los partidos políticos de oposición ha ido acompañado de un cuestionamiento de los canales tradicionales de acceso al poder. En la actualidad están por redefinirse nuevas reglas que normen la convivencia y la competencia entre las distintas fuerzas políticas. Ellas tendrán que apuntar hacia la consolidación de un sistema que permita la transmisión pacífica del poder. En cuanto a este punto lo fundamental será que el PRI asuma sus derrotas electorales. Sin esto no podrá haber un mínimo acuerdo político entre las distintas fuerzas contendientes.

En este contexto, la tendencia salinista aparece como una posibilidad -que no garantiza- para reformar al PRI e integrarlo a un nuevo pacto político. Habrá que analizar con detenimiento la evolución de la contradicción entre modernizadores y tradicionales. De cómo se resuelva este conflicto depende en buena medida una reforma democrática del sistema político.

CITAS:

[\*] Profesora del Departamento de Sociología de la UAM-A. Miembro del Area de Teoría de las Formaciones Sociales y del Consejo Editorial de la Revista El Cotidiano.

[1] Utilizamos el concepto de partido del gobierno para caracterizar al PRI ya que este nos parece más adecuado para analizar el fenómeno que nos hemos planteado y el más preciso para describir lo que es el partido. Como es bien sabido, se han utilizado un sinnúmero de conceptualizaciones para abordar el estudio del tricolor. Aparato de hegemonía, partido oficial, partido del Estado son algunas de las más comunes. En realidad estas definiciones no presentan diferencias de fondo. Sus diferencias más bien radican en las funciones que traten de enfatizar. Así, el concepto de aparato de hegemonía pone el acento en la función de creación del consenso (Leff, 1982: 202) mientras que el de partido del Estado enfatiza la función de mantenimiento del monopolio de los puestos públicos y la del predominio ideológico del Estado entre la sociedad (González Casanova, 1981:183). Preferimos no usar este último concepto ya que, nos parece, se presta a confusiones. Generalmente, el concepto de partido del Estado ha servido para analizar las estructuras políticas totalitarias que tienen como característica la existencia de un partido identificado con el Estado que ha asfixiado la iniciativa de la sociedad. Por otro lado, el concepto es confuso ya que cualquier partido en tanto actúa en el ámbito de lo público, forma parte de la estructura estatal.

[2] Según los artículos publicados por González Guevara la Corriente Crítica difiere con respecto de la modernizadora en materia de política económica ya que considera antipopular la que se ha llevado a cabo desde el sexenio anterior. Con la tradicional disiente en tanto se plantea la modernización del PRI y la democratización del subsistema de partidos en general.

BIBLIOGRAFIA:

Aguilar Camín, H. (1988) Después del Milagro, Cal y Arena, México.

Córdova, A. (1973) La ideología de la Revolución Mexicana, Era, México.

González Casanova, P. (1981) Los partidos políticos en México, Era, México.



Leff, G. (1982) "El Partido de la Revolución Institucionalizada: Aparato de hegemonía del Estado Mexicano" en Alonso, J. (coord.), El Estado Mexicano, Nueva Imagen, México.

Loeza, S. (1989) "Los hermanos enemigos" en López Cámara, F. (comp.), Sociedad, Desarrollo y Sistema Político en México, UNAM-Centro Regional de Investigaciones Interdisciplinarias, 11-17. México.

Martínez Assad, C. (1985) Municipios en conflicto, UNAM, México.

Molinar Horcasitas, J. (1988) "La democratización y sus obstáculos", Cuaderno de Nexos, noviembre, 4, 17, México.

Pereyra, C. (1985) "Los efectos políticos de la crisis" en González Casanova, P. y Aguilar Camín, H. (coords.), México ante la crisis, Siglo XXI, 207-220, México.

Sánchez Sussarrey, J. (1988) "México: ¿Corporativismo o Democracia?", Vuelta, marzo, vol. 12, núm. 136.

Salinas de Gortari, C. (1988) El reto de la democracia, El Nacional.